

## RESÚMENES / ABSTRACTS \*

\* Translated by Denis E. Carlin.

A. García y García, *Perspectivas del Derecho común romano-canónico al filo del siglo XXI*. En el presente artículo se analizan las perspectivas de futuro previsibles para la investigación y estudio del Derecho romano-canónico en los comienzos del siglo XXI. Para ello nos atenemos al siguiente esquema: 1. Antecedentes altomedievales: el renacimiento del siglo XII, de las escuelas notariales a las universidades. 2. El Derecho canónico clásico medieval. 3. El Derecho común en la Edad Moderna. 4. La historia del Derecho canónico en el siglo XX: 1) Congresos internacionales de historia del Derecho común medieval: Lovaina, Boston, Estrasburgo, Toronto, Salamanca, Berkeley (USA), Cambridge (Inglaterra), San Diego (California), Munich (Alemania), Syracuse (USA) y Catania (Italia). 2) Publicaciones del Institute of Medieval Canon Law (Berkeley), aparte de las actas de los Congresos internacionales mencionados. 3) *Synodicon Hispanicum*, vols. 1-7, Madrid, Biblioteca de Autores Cristianos, dirigido por Antonio García y García. Comprende los sínodos diocesanos celebrados desde el Concilio 4 Lateranense de 1215 y el Concilio de Trento en Portugal, Galicia, Asturias, León, Extremadura y Castilla la Vieja. 4) Concilios legatinos y provinciales.

C. Salinas Araneda, *Algunas reflexiones en torno a la inculturación del Derecho canónico*. La inculturación y su natural consecuencia que es la evangelización de la cultura constituye una de las tareas apremiantes de la Iglesia al inicio del tercer milenio. En dicha tarea el Derecho canónico ha de jugar un papel importante como instrumento al servicio de dicho proceso. Pero, además, el Derecho de la Iglesia ha de jugar un rol protagónico en el específico ámbito jurídico, inculturándose y evangelizando los derechos estatales dejando en ellos la huella del Evangelio a través de los principios y las soluciones técnicas elaboradas por la canonística. Se trata, empero, de un proceso en ambas direcciones pues, cuando corresponda, podrá también la Iglesia enriquecerse con las soluciones elaboradas por los derechos estatales para hacer más plena en su seno la dimensión de justicia. Todo esto no es una novedad en la Iglesia, pues en momentos históricos diversos, esta interacción entre ambos derechos se ha producido con innegables frutos para ambos. Con todo, la tarea no se presenta simple por lo que para ello se hace imprescindible una condición que sólo la Iglesia puede proporcionar: el compromiso vital con Cristo.

M.<sup>a</sup> Elena Olmos Ortega, *Laicos y oficios eclesiásticos*. Los Códigos vigentes, latino y oriental, han dado un giro copernicano a la situación jurídica del laico en la Iglesia. Este cambio ha sido posible gracias a la aportación eclesiológica del Concilio Vaticano II. Este estudio, tras analizar la condición jurídica del fiel laico derivada del bautismo, que incluye una referencia al proceso de formalización jurídica de los derechos del fiel, se detiene en la capacidad jurídica

del laico para los oficios eclesiásticos, reconocida en los cáns. 228 y 408 del Código latino y oriental, respectivamente, explicando que dicha capacidad se encuentra supeditada al cumplimiento de dos requisitos genéricos por parte del laico: la eclesialidad o 'estar en comunión con la Iglesia' y su idoneidad. Seguidamente se subrayan los límites de esta capacidad jurídica, determinados por el sacramento del orden, de ahí que los cáns. 129 y 979 respectivamente señalan que los sujetos hábiles de potestad de régimen son los clérigos, por lo que se plantea la cuestión del significado que en estos cánones se establece a la cooperación de los laicos en el ejercicio de la potestad de jurisdicción, cuestión todavía abierta. Igualmente se analizan los derechos y deberes correlativos al desempeño de oficios eclesiásticos por parte de los laicos. Finalmente, tras explicar la participación del laico en la vida de la Iglesia, señalando aquellos oficios eclesiásticos concretos que pueden desempeñar, presentando a tal efecto un cuadro esquema comparativo de dicha participación en los dos Códigos, el trabajo termina con unas consideraciones conclusivas.

Juan J. Etxeberria, *Los movimientos eclesiales en el umbral del siglo XXI*. La vitalidad y la expansión de los movimientos eclesiales en el panorama eclesial plantean la dificultad de un lenguaje y una reflexión teológico-canónica adaptada a su novedad y originalidad propia. La variedad y la riqueza de estos movimientos dificultan una tipología concreta de los mismos, sin embargo, se puede afirmar que se caracterizan especialmente por un carisma propio, un carácter global de los diversos órdenes de fieles del pueblo de Dios una acción común con empuje misionero y apertura ecuménica y, por último, por una vida comunitaria y de oración consistente y estructural. Desde esta fenomenología se aborda la naturaleza y los efectos jurídicos de los compromisos, así como el reconocimiento eclesial de dichos movimientos. La intención de la exposición es prevalentemente interpelante, aunque, a veces, se ofrezcan algunas pistas de solución en relación a temas como la problemática sobre la formación e incardinación de los sacerdotes, la admisión y los compromisos de los miembros bautizados no católicos, la participación de los esposos y célibes en estos movimientos y el reconocimiento eclesial. En definitiva, se intenta visualizar los desafíos planteados por los movimientos eclesiales a la teología y al Derecho canónico en torno a la vida consagrada. A la vez, quisiera haber contribuido a abrir la puerta a investigaciones futuras sobre la problemática eclesial de estos movimientos.

L. Álvarez Prieto, *La repercusión en el sistema matrimonial canónico de la utilización indiscriminada de los medios audiovisuales desde la perspectiva del canon 1095, apartados segundo y tercero*. Este trabajo, pretende estudiar la incidencia que tiene en el Derecho matrimonial canónico la utilización abusiva de medios audiovisuales tales como la televisión, el teléfono erótico, o en la actualidad internet a través del propio ordenador personal. La proliferación de juegos de toda índole, el chateo, la visualización de escenas eróticas, etc., supone tanto como un desequilibrio psicológico en el individuo en detrimento del matrimonio. Se ha advertido que un individuo de tales características necesita

cuanto menos mas de cuarenta horas de utilización del ordenador lo que va en detrimento de la relaciones interpersonales de los cónyuges. Creo que la utilización incontrolada u abusiva del ordenador y otros medios audiovisuales, se debe posiblemente a un fenómeno de inmadurez en el sujeto que tiene su representación en el matrimonio, sobre todo en los casos en los que el ordenador se utiliza como medio de satisfacción sexual por que en tales supuestos se está desviando consciente o inconscientemente el objeto sexual. Se produce en estos casos, en el individuo, un cierto desequilibrio psicológico que puede hacer nulo el matrimonio que condicionara el bien de los cónyuges, el bien de la fidelidad, y en los casos más graves, puede determinar la existencia de un grave defecto de discreción de juicio o la imposibilidad de cumplir por causa de naturaleza psíquica.

A. Fuentes Calero, *El matrimonio contraído por miedo (can. 1103): comentario a la Respuesta de la Comisión de Intérpretes de 23-IV-1987*. En este artículo el autor aborda el estudio del matrimonio contraído por miedo, tal y como se regula en el can. 1103 del CIC, desde una doble perspectiva: la consideración de este canon como fruto de la labor jurisprudencial y doctrinal que se había producido con ocasión de la aplicación y estudio del can. 1087 del Código piano-benedictino, y la definición del concreto contexto normativo en el que este texto legal ha de insertarse, esto es, los principios conciliares de tutela de la dignidad y libertad de la persona (con el expreso reconocimiento de la libertad matrimonial como un derecho humano fundamental), la nueva definición conciliar del matrimonio como comunidad de vida y amor, y el can. 219 que reconoce la inmunidad de coacción en la elección del estado de vida como derecho humano fundamental del fiel cristiano. Se hace un recorrido por aquellos requisitos contenidos en el antiguo can. 1087 que habían venido siendo puestos en cuestión: la exterioridad, la injusticia y la relevancia del miedo indirecto. Con ocasión del mismo se analizan los conceptos canónicos implicados en estos requisitos y los avatares históricos de la doctrina y de la jurisprudencia que se ocuparon de ellos. Sigue una breve referencia del proceso codificador de 1983 como paso previo al análisis del texto normativo actual mediante el estudio de su estructura y elementos, con especial mención a la recepción doctrinal de los mismos, que no ha sido ni pacífica ni unánime. La última parte del artículo es una aproximación a la respuesta de la Comisión Pontificia para la interpretación del CIC de 23-IV-1987 que trató sobre la aplicabilidad del can. 1103 al matrimonio de los acatólicos. Aquí se ve como la doctrina ha entendido que esta respuesta estaba tocando el problema del origen legal de la nulidad del matrimonio coaccionado, el derecho positivo o el derecho natural, si bien haciéndolo con cierta vaguedad e imprecisión, dejando así no pocos aspectos abiertos.

J. Goti Ordeñana, *Financiación de la Iglesia*. La financiación de la Iglesia viene siendo una difícil cuestión, porque desde un principio no se entró en el moderno sistema capitalista de organización de la sociedad, sino que por la forma como se realizó la desamortización, se aceptó una forma de financiación

estatal, creando una cierta dependencia del Estado. Es urgente, hoy día, que se adopte una financiación propia de la Iglesia. El Código de 1983 urge iniciar un nuevo camino, por lo que ha abierto cauces, para que dejando el sistema antiguo, se venga a organizar una estructura económica moderna en la Iglesia, tanto para atender a sus actividades de apostolado, como de asistencia humana que en una institución como la Iglesia, abierta a la atención integral del hombre, deben ir aumentando constantemente. Considerando el sistema español, hay que caminar, en primer lugar, hacia una separación del Estado, pero con colaboración, porque hay una conciencia de que se trata de la promoción de libertad religiosa, como derecho fundamental. El sistema económico de la Iglesia exige que en cada diócesis se vaya estructurando una buena organización de los órganos de la administración económica, y una determinación de los cauces para conseguir medios económicos, que pueden ser por medios propios, y por asignación de alguna parte hecha por el Estado, que en el caso español se hace por un impuesto afectado, y que hay que considerarlo normal porque se ordena a la promoción de un derecho fundamental. Incluyendo en esta colaboración, una acción por medios indirectos, mediante la liberación de algunos impuestos. En la Iglesia se ha iniciado una reestructuración económica, con unos objetivos claros, para acomodarse al sistema que exige la sociedad actual.

José L. Morrás Etayo, *Conferencia Episcopal Italiana: Decreto general sobre disposiciones para la tutela del derecho a la buena fama y a la intimidad, 20 octubre 1999. Texto y comentario*. Los archivos eclesiásticos, que en su día nacieron como instrumento de gobierno, hoy guardan la memoria histórica. Los datos en ellos contenidos son suficientes para informar sobre personas y situaciones. Hoy en día, no sólo los investigadores sino también personas movidas por otros intereses se acercan a los archivos de la Iglesia para obtener información. El derecho a la información no es un derecho ilimitado. Este derecho a la información que tiene unos, en no pocas ocasiones entra en fricción con el derecho a la intimidad y a la buena fama que tienen otros. Acto seguido nos viene la pregunta: llegado el caso ¿cuál de los dos derechos prevalece? La CEI ha tratado de dar respuesta teniendo en cuenta todos los factores mencionados y con un decreto general ha regulado las disposiciones para la tutela del derecho a la buena fama y a la intimidad, garantizando a su vez el derecho a la información dentro de unos cauces. José L. Morrás Etayo, profesor de Derecho canónico, comenta dicho decreto y tras una introducción lo divide en cuatro partes: principios, registros y archivos, responsables de los datos, información a los interesados. En ellas distribuye los 12 artículos. A su vez, en la parte segunda que es la más amplia analiza las personas que pueden acceder a los datos, las peticiones que se pueden hacer a los responsables de los archivos, los procedimientos que hay que seguir en la obtención de los mismos y la prohibición de eliminar los registros. El comentario concluye con unas conclusiones extraídas del propio decreto.

A. Sols Lucia, *El bien público en las causas matrimoniales*. El bien público de la Iglesia es una figura capital de frecuente referencia tanto en el actual Código de Derecho canónico como en el anterior y adolece de una indetermi-

nación de contenido. Guarda relación directa con el bien común eclesial que incluye, al mismo tiempo, la tutela judicial de los derechos fundamentales del fiel. Con relación al matrimonio cristiano, este bien público se identifica con la doctrina fundamental definida en el Vaticano II. La acción tuitiva ante causas matrimoniales corresponde al promotor de justicia y también al defensor del vínculo, si bien necesita fundamentarse en hechos probados cuya función fedataria y legitimación de actos procesales corresponde al notario eclesiástico. Tres ministerios de reconocida tradición multiseular. Al momento de celebrarse el matrimonio canónico, los intereses particulares de ambos consortes sintonizan con el bien público. Sin embargo, en una causa de nulidad, separación o disolución, uno y otro interés entran inicialmente en conflicto. Compete al ministerio público (promotor, defensor, notario) aproximar y elevar el bien privado de las partes a ese otro bien social de la Iglesia.

A. Liñán García, *La protección del factor religioso en el nuevo Código Penal español (Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre)*. Los profundos cambios de toda índole (sociales, económicos, políticos, culturales, etc.) que se generaron en España con la entrada en vigor de nuestra Constitución y, con ello, de la instauración de un régimen democrático han provocado una renovación legislativa en todos los ámbitos y, como no, también en las disposiciones que regulan el fenómeno religioso, dimensión esencial de la persona humana objeto de protección en todas las leyes penales, aunque eso sí, abordado desde muy diferentes perspectivas según cual fuera el sistema y la filosofía política imperante en cada momento histórico. En este artículo, nos centramos, por tanto, en el Derecho penal que con la elaboración y promulgación de un nuevo Código (LO 10/1995, de 23 de noviembre) pretende conseguir la adaptación positiva a los nuevos valores constitucionales.

A. García y García, *Prospects for roman-canon common law at the turn of the 21<sup>st</sup> century*. The article analyses the possible future outcomes for the research and study of roman-canon law at the beginning of the 21<sup>st</sup> century, using the following outline: 1. High medieval antecedents: renaissance from the 12<sup>th</sup> century onwards, from the notary schools to the universities. 2. Classical medieval canon law. 3. Common Law in the modern era. 4. History of Canon Law in 20<sup>th</sup> century: 1) International congresses on the medieval common law: Louvain, Boston, Strasbourg, Toronto, Salamanca, Berkeley (USA) Cambridge (England), San Diego (California) Munich (Germany), Syracuse (USA) and Catania (Italy). 2) Publications of the Institute of Medieval Canon Law (Berkeley), as well as the proceeding of the above mentioned congresses. 3) *Synodicon Hispanicum*, vols. 1-7, Madrid, Biblioteca de Autores Cristianos, directed by Antonio García. This takes in diocesan synods after the 4<sup>th</sup> Council of the Lateran and the Council of Trent in Portugal. Galicia, Asturias, León, Extremadura and Old Castille. 4) Legatine and provincial councils.

C. Salinas Aranedá, *Some reflections on the inculturation of canon law*. Inculturation and its natural consequence, the evangelization of culture, consti-

tute one of the most important tasks for the Church at the beginning of the third millennium. Canon law has an important task to play as an instrument at the service of this process. The Law of the Church however has a leading role to play in the specifically juridical ambit, inculturating itself and evangelizing state laws, imparting to them the imprint of the Gospel by means of the principles and technical solutions reached by canon law. We are dealing however with a two way process, because, when appropriate, the Church can be enriched by solutions reached in state systems in order reach a greater degree of justice within her own system. All this in no way constitutes a novelty for the Church since, at different historical moments, this interaction between both systems has produced undeniable fruits for both. Having said that, only the Church can furnish the indispensable condition of vital commitment to Christ.

M.<sup>a</sup> Elena Olmos Ortega, *Lay people and ecclesiastical office*. The present codes, both Latin and Eastern, have taken a Copernican turn around in the juridical situation of the lay person in the Church. This change has been possible thanks to the ecclesiological contribution of Vatican II. This study, after analyzing the juridical condition of the lay faithful which derives from their baptism, and which includes a reference to the process of juridical formalization of the rights of the faithful, dwells on the juridical capacity of the lay person as recognized in can. 228 and can. 408 respectively of the Latin and the Eastern Code, explaining that this capacity is found to be subordinate to two general requirements on the part of the lay person: 'ecclesiality' or 'being in communion with the Church' and suitability. The study then goes on to underline the limits of this juridical capacity determined by the sacrament of order, since cans. 129 and 979 respectively indicate that subjects capable of the power of governance are clerics; this leads to the question of the meaning of the cooperation of the laity in the power of jurisdiction, a question which is still open. The rights and duties of lay people involved in ecclesiastical offices are also analyzed. Finally, after explaining the participation of the laity in the life of the Church, highlighting those concrete offices that they can hold, thus presenting a comparative schema of said participation in both Codes, the article finishes with some concluding considerations.

Juan J. Etxeberria, *Ecclesial movements on the threshold of the 21<sup>st</sup> century*. The vitality and expansion of the ecclesial movements in the ecclesial panorama raise the difficulty of finding a language and a theological-canonical reflection which responds adequately to their novelty and originality. The variety and richness of these movements make it difficult to typify them, but we can affirm however that they are characterized by a proper charism, a global character which embraces the different orders of the faithful within the People of God, a common action which has a missionary thrust and an ecumenical openness and, finally, a community life of ongoing and structured prayer. Given this phenomenology, the article looks at the nature and juridical effects of the commitment made and also the ecclesial recognition of said movements. The intention of the exposition is primarily interpretive but it also offers some indi-

cations of possible solutions to problems regarding the formation and incardination of priests, the admission and commitment of non-Catholic baptized members, the participation of both celibate and married people and ecclesial recognition. The article seeks to bring to light the challenges posed by the ecclesial movements to our theology and canon law of religious life and, at the same time, to contribute to opening the door to future research on the ecclesial questions thrown up by these movements.

L. Alvarez Prieto, *The repercussion on the canonical matrimonial system of the indiscriminate use of audiovisual media in the light of can. 1095, numbers two and three*. The article attempts to study the incidence in the canon law of marriage of the abusive use of audiovisual media such as TV, erotic phone lines or internet access from a home computer. The proliferation of games of all kinds, chat lines, witnessing erotic scenes etc supposes an psychological imbalance in the individual to the detriment of marriage. It has been pointed out that an individual with these characteristics needs at least forty hours computer access, which harms the interpersonal relationship of the spouses. The author thinks that uncontrolled or abusive use of the computer and other audiovisual media is possibly due to a phenomenon of immaturity in the subject which affects the marriage, especially in those cases where the computer becomes a means of sexual satisfaction because in these cases there is a conscious or unconscious shift of sexual object. In these cases the individual exhibits a certain lack of psychological balance which could make their marriage null because it would condition the good of the spouses, the good of fidelity, and in graver cases, determine the existence of a grave lack of due discretion or the impossibility of fulfillment because of a cause of a psychological nature.

A. Fuentes Calero, *Marriage contracted because of fear (can. 1103) commentary on the Response of the Commission of Interpreters of 23<sup>rd</sup> June 1987*. In this article the author studies marriage contracted because of fear as regulated for in can. 1103 of the CIC from a double point of view: it considers the canon as the fruit of the jurisprudence and doctrinal work produced since the application of can. 1087 of the Pio-benedictine Code and as the definition of the concrete normative context in which this legal text has to be inserted i.e. the councils principles of protection of the dignity and freedom of the person (with the recognition of freedom to marry as a basic human right), the councils new definition of marriage as community of life and love, and can. 219 which recognizes freedom from coercion in choosing ones state of life as a fundamental human right of the Christian faithful. The author reviews those requisites of the former can. 1087 which had been brought into question: exteriority, injustice and the relevance of indirect fear. This brings the author to analyze the canonical concepts implied by these requisites and the historical avatars of doctrine and jurisprudence that dealt with them. Brief reference is then made to the codifying process of 1983, as a preamble to the analysis of the current normative text by studying its structure and elements, with special mention made of their doctrinal reception, which has

been neither peaceful nor unanimous. The last part of the article tackles the reply of the Pontifical Commission for the interpretation of the CIC of 23<sup>rd</sup> April 1987, which dealt with the applicability of can. 1103 to the marriage of non-Catholics. Here we see that doctrine has understood this reply as touching the problem of the legal origin of the nullity of forced marriage, positive or natural law, although this is done with a certain vagueness and lack of precision which leaves quite a few aspects open.

J. Goti Ordeñana, *Funding the Church*. Funding the Church has come to be a difficult question, because, right from the beginning, the Church did not enter into the modern capitalist system of organizing society but rather due to the way disentanglement took place she accepted a form of state funding, creating a certain dependency on the State. Today it is imperative that the Church adopt proper funding. The 1983 Code encourages us to begin a new way, opening channels to leave the previous system behind while organizing a modern economic structure in the Church in order to look after both her apostolic activities and those other humanitarian activities which, given that the Church responds to all human needs, are constantly increasing. The Spanish system, first of all, has to move towards a separation from the State, maintaining however collaboration because of the consciousness that we are dealing with the promotion of religious freedom as a fundamental right. The economic system of the Church requires setting up in every diocese well organized organs of economic administration and establishing channels in order to obtain financial resources: these can be her own means, or part funding from the state which, in the case of Spain comes from taxes and should be considered normal because it promotes a fundamental right. The collaboration can include action by indirect means though exemption from some taxes. A new economic restructuring with clear aims has begun in the Church in order to fit in with the system currently obtaining in society.

José L. Morrás Etayo, *The Italian Episcopal Conference: General Decree on directives to protect the right to a good name and to privacy, 20<sup>th</sup> October 1999. Text and commentary*. Ecclesiastical archives which, in their day, were born as instruments of governance, today contain historical records. The data contained in them gives us information about people and situations. Today, not only researchers access Church archives to obtain information, but also other people with other interests. The right to information is not without its limits. The right of some people to have access to information in not a few occasions can cause friction when it comes up against the right that others have to their good name or privacy. That immediately bring us to the problem: in this case, which right prevails? The Italian Episcopal Conference has tried to give an answer that takes into account all the factors mentioned and has regulated by general decree provisions to safeguard the right to a good name and privacy, while at the same time guaranteeing the right to information through certain channels. José L. Morrás Etayo, professor of canon law, offers a commentary on the decree and, after an introduction, divides it into four parts: principles, registers and archi-

ves, those responsible for data, information to interested parties; he then divides the twelve articles between these. In the second part, which is larger, he goes on to analyze those persons who may have access to data, the requests that can be made to those responsible for archives, the procedures that have to be followed to obtain information and the prohibition to get rid of registers. The commentary finishes with some conclusions drawn from the document itself.

A. Sols Lucia, *Public good in marriage cases*. The public good of the Church is an important figure, frequently referred to in both the present and the former Code of Canon Law, but it suffers from a lack of clarity as to its actual content. It has a direct relationship with the common good of the Church which, at the same time, includes the judicial protection of the fundamental rights of the faithful. In relation to Christian marriage, this public good is identified with fundamental doctrine as defined by Vatican II. In marriage cases, the defensive or safeguarding action corresponds to the promoter of justice or defender of the bond who needs to base himself on proven facts; to the ecclesiastical notary corresponds the function of admitting their judicial value and overseeing the legitimacy of the acts of the process. These are three ministries of recognized tradition spanning centuries. At the time of celebrating canonical marriage, the private interests of the contracting parties are 'in tune with' the public good. In a case of nullity, separation or dissolution however, one or other interest initially enters into conflict. It is the responsibility of the public ministry (promoter, defender, notary) to bring together and raise the private good of the parties with this other social good of the Church.

A. Liñán García, *The protection of religion in the New Spanish Penal Code (Organic Law 10/1995, 23<sup>rd</sup> November)*. The profound changes of every type (social, economic, political, cultural etc.) which have happened in Spain with the coming into force of the Constitution, and with it the setting up of a democratic régime, have provoked a renewal of legislation in all spheres; this also involves the arrangements which regulate the religious phenomenon, an essential dimension of the human person, the object of protection in all penal laws, although this has been approached from many different points of view according to the system and political philosophy prevailing at any particular time. This article concentrates therefore on the penal law which, with the elaboration and promulgation of a new Code (LO 10/1995 of 23<sup>rd</sup> November), attempts to achieve the positive adaptation to the new constitutional values.